



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe firma conjunta**

**Número:** IF-2022-21344159-APN-VOCXI#TFN

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 7 de Marzo de 2022

**Referencia:** VOCXI - EXP-2019- 69809104-APN-SGAI#TFN y su acumulado N° EX-2019-69813901-APN-SGAI#TFN - Smurfit Kappa de Argentina S.A. s/ recurso de apelación. Sentencia.

---

En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10° Nominación), la Dra. Agustina O'Donnell (Vocalía de la 11° Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12° Nominación) para resolver el Expediente N° **EXP-2019- 69809104-APN-SGAI#TFN** y su acumulado N° **EX-2019-69813901-APN-SGAI#TFN** caratulado **"Smurfit Kappa de Argentina S.A. s/ recurso de apelación"**.

**La Dra. O'Donnell dijo:**

I. Smurfit Kappa de Argentina S.A. (Smurfit Kappa, en adelante) interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 78/2019 y 79/2019, dictadas el 26 de junio de 2019, en las que se le aplica sendas multas de defraudación de \$831.127,29 y \$397.190,30, por no haber ingresado el impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 08/2012 a 06/2013 e imputándole haber presentado en forma inexacta las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los mismos periodos fiscales, respectivamente; ello, con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la misma ley.

En sus presentaciones ante este Tribunal, alega por varias razones la improcedencia de las sanciones y solicita que se las deje sin efecto, con costas.

II. Corridos los traslados de los recursos, fueron contestados por la representación fiscal en los IF-2019-92464808-APN-DTD#JGM e IF-2019-103258053-APN-DTD#JGM-, en los que pide que se confirmen sus Resoluciones; también con costas.

III. Por sentencia de esta Sala del 13 de febrero de 2020, se dispuso acumular el EX-2019-69813901-APN-SGAI#TFN -en trámite ante la Voc. 12va.- al EX-2019-69809104-APN-SGAI#TFN.

IV. Encontrándose en trámite las actuaciones, la recurrente el 24 de noviembre de 2020, en el IF-2020-81392766-APN-DTD#JGM, solicita la condonación de las sanciones en los términos del art. 12, cuarto párrafo de la ley 27.562 y art. 25 de la RG 4816/2020.

Por su parte, el Fisco Nacional, el 10 de marzo de 2021, en el IF-2021-21350923-APN-DTD#JGM, informa que Smurfit Kappa no reviste la condición de MIPYME y que, del análisis de sus declaraciones juradas, surge que posee activos financieros en el exterior por lo que quedaría alcanzada por las restricciones del art. 8° de la ley 27.562. Agrega que no registra presentación de la declaración jurada del régimen informativo previsto en el art. 59 de la RG 4816/2020.

Sostiene allí que “...independientemente de la necesidad de proceder a la constatación de las demás condiciones exigidas por la norma (cancelación de la obligación principal, presentación de declaraciones juradas rectificativas – art. 9 RG 4816/2020); entiende esta representación fiscal que debería requerirse a la rubrada se manifieste en relación a la verificación del cumplimiento de todos aquéllos requisitos exigidos por la normativa legal aplicable (art. 8° Ley 27541, ss. y ccdtes y RG 4816/2020); cumplido lo cual se ordene nuevo traslado a este Fisco para su respectiva puesta en conocimiento”.

Conferido el traslado a la parte actora de dicha presentación, en el IF-2021-26413682-APN-DTD#JGM se agravia de las manifestaciones de la representación fiscal porque entiende que la ley 27.562 únicamente exige a los contribuyentes o responsables que para se produzca *ipso iure* la condonación de las sanciones:

- (i) que no se encuentren firmes, lo que se cumple ya que precisamente se están discutiendo ante este Tribunal,
- (ii) que la cancelación de las obligaciones principales haya ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, lo que surge incluso de las mismas Resoluciones en las que se deja constancia que fueron canceladas al contestar la vista prevista en el art. 17 de la ley 11.683.

V. Por medio de la PV-2021-76842247-APN-VOCXI#TFN se elevan los presentes autos a consideración de Sala.

VI. Corresponde entonces resolver sobre lo solicitado.

Para ello cabe tener en cuenta que el art. 8° de la ley 27.541 (B.O. 23/12/2019), modificado por la ley 27.562 (B.O. 26/08/2020), estableció que los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de condonación de intereses, multas y demás sanciones al que se refiere el Título IV, del Capítulo I, de esa ley.

Y si bien en dicha norma se excluyen de sus beneficios a determinados sujetos, entre ellos, en lo que aquí interesa, a las personas jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior y que no lleven a cabo el acto de repatriación en las condiciones, económicas y jurídicas, a las que allí se hace referencia, lo cierto también es que dicha exclusión, tal lo que resolviera en fecha reciente la Excma. Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este Tribunal al fallar en la causa “Telcom Ventures de Argentina S.A.”, en sentencia del 21 de junio de 2021, no rige cuando se trata exclusivamente de la aplicación del beneficio de condonación de pleno derecho de la sanción.

En efecto, dijo allí que,

“Que, de acuerdo al contexto normativo supra transcrito, corresponde determinar si la actora se encuentra excluida del beneficio establecido por el art. 12, cuarto párrafo, de la ley 27.541 -y su modificatoria- en función de su carácter de persona jurídica que: (i) no reviste la calidad de MIPyME, entidad sin fines de lucro u organización comunitaria y (ii) es titular de un activo en el exterior no repatriado en los términos exigidos por el

art. 8° de la mencionada norma.

*A tal fin, cabe adelantar que un análisis integral del plexo legislativo involucrado permite considerar que la condición de repatriación a la que refiere el art. 8° de la ley 27.541 se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos que pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios previstos para las obligaciones tributarias regularizadas en los términos allí dispuestos, pero no para la condonación de las multas correspondientes a obligaciones sustanciales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, supuesto contemplado en el cuarto párrafo del art. 12 de la referida norma.*

*En efecto, el art. 8° supra transcripto resulta claro en cuanto exige la repatriación de al menos el 30% del producido de la realización de los activos extranjeros “dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”. En esa misma línea, el art. 8°, punto 2°, de la RG 4816 establece que: “En el caso de que el mismo sujeto regularice la deuda mediante diversos planes de facilidades de pago, pago al contado y/o compensación, el plazo de SESENTA (60) días previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones se computará desde la primera adhesión”. Seguidamente, el punto 3° del mismo artículo reza: “El incumplimiento de la repatriación del producido de la realización de los activos financieros en el plazo fijado en el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en los términos y condiciones previstos en esta resolución general, determinará el rechazo de la adhesión al régimen de regularización”.*

*En ese mismo orden de ideas, se inscribe el art. 59 de la RG 4816 en cuanto establece que “Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562” y aquellos alcanzados por el requisito de repatriación “deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562. A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “.pdf”, un informe especial extendido por contador público independiente matriculado (...) quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior”. Al respecto, es menester destacar que la propia demandada señaló que “La obligación de cumplir con el Régimen Informativo que prevé el artículo 59 de la Resolución General N° 4816/2020 comprende a todos los contribuyentes que soliciten la adhesión” (conf. respuesta de la AFIP a la consultas web ID 25835048, disponible en [www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar)).*

*En este escenario, no resulta ocioso señalar que, de acuerdo a la nota aclaratoria 38.1 de la RG 4816, “La adhesión se refiere a la manifestación de la voluntad a través del reconocimiento de la deuda mediante el plan de facilidades de pago, pago al contado o compensación”; definición que no condice con el significado de la locución “de pleno derecho” incorporada por el legislador en el art. 12, cuarto párrafo, de la ley 27.541 -y su modificatoria- y utilizada por el Máximo Tribunal para calificar los efectos de aquellas normas que no requieren “petición de parte” (conf. Fallos: 277:347; 281:297; 295:729 y 815; 321:3160 y 330:4544)”.*

*Agregó en dicha oportunidad también que, “Por lo demás, en nada modifica lo expuesto la circunstancia de que el art. 28 de la RG 4816 supedita el registro automático de la condonación en el sistema informático del organismo recaudador al cumplimiento de “los distintos requisitos dispuestos en la presente norma”. Ello es así, por cuanto: (i) a diferencia de la redacción del art. 25 de la RG 4667 supra transcripto, el art. 28 de la RG 4816 no establece requisitos “para hacer efectivo el beneficio de condonación” sino para efectuar un registro automático de la misma; y (ii) la disposición mencionada en último lugar refiere a la condonación de pleno derecho de multas e intereses y respecto a estos últimos, el art. 9°, último párrafo de la RG 4816, prescribe “De*



*tratarse de obligaciones tributarias canceladas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 27.562 que se encuentren en curso de discusión en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial por vía de repetición, el beneficio de condonación de los intereses en los términos previstos en el quinto párrafo del artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones resultará procedente siempre que el interesado desista de la acción y del derecho y renuncie a la promoción de cualquier procedimiento respecto de la obligación cancelada, en cuyo caso deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) mediante el servicio con Clave Fiscal denominado "Presentaciones Digitales", implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite "Presentación F. 408 - Allanamiento o desistimiento".*

*Por lo tanto, la letra del art. 28 de la RG 4816 no es determinante para tener por válida la interpretación ensayada por el Fisco Nacional puesto que la referencia al cumplimiento de los requisitos para "registrar" la condonación no implica que sea exigible la repatriación; máxime cuando la RG 4687: (i) establece condiciones específicas para el supuesto de condonación de pleno derecho de intereses vinculados a obligaciones sustanciales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.541 y su modificatoria (conf. art. 9°, último párrafo), y (ii) reglamenta los requisitos aplicables a la condonación de multas como la aquí involucrada en los arts. 25, inciso a, y 27; todo lo cual conduce a desestimar el agravio impetrado.*

*En este contexto, es dable advertir que el legislador podría haber incorporado la limitación prevista en el art. 8° de la ley 27.541 y su modificatoria en el art. 16 de esa norma que excluye "de las disposiciones de esta ley" a quienes se hallen en alguna de las situaciones allí enumeradas, o bien replicarla en el art. 12 para que proceda la condonación de las multas y demás sanciones, pero no lo hizo. Frente a ello, no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), sin que quepa atribuir a las normas un alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del cual emanan (Fallos: 310:1689 y dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite la Corte Suprema en Fallos: 343:702)".*

En el caso, no se encuentra en discusión que incluso a la fecha de la sanción de la ley 27.541 la recurrente había cancelado las obligaciones fiscales que dieron lugar a la imposición de las sanciones ya que lo hizo cuando fue notificada de la vista que prevé el art. 17 de la ley 11.683. Así surge de los Considerandos de las Resoluciones recurridas.

Así las cosas, no puede decirse que Smurfit Kappa se *adhirió* al régimen de la ley 27.562 y sus reglam. ni tampoco que se *acogió* a sus disposiciones, que son los términos que allí se utilizan cuando se condiciona la procedencia de sus beneficios al recaudo de repatriación de activos en el exterior, ya que no regularizó una deuda pendiente de pago durante su vigencia ni utilizó tampoco ninguna de las formas de cancelación allí previstas; el recaudo que sostiene la representación fiscal como incumplido, entonces, no rige cuando se trata de la condonación de pleno de derecho prevista en la misma ley y la obligación ya se encuentra cancelada con anterioridad. Con arreglo al principio de legalidad que con especial énfasis rige en materia tributaria por mandato constitucional, no corresponde dar al texto de la ley un alcance que no es el que se desprende de sus estrictos términos y condicionar uno de sus beneficios a requisitos que no están allí específicamente exigidos.

Lo expuesto, sumado a que Smurfit Kappa no se encuentra comprendida en las exclusiones del art. 16, así como tampoco en las restantes del art. 8° de la misma ley, resulta suficiente para hacer lugar a lo solicitado.

VII. Por lo expuesto, corresponde declarar condonadas las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 78/2019 y 79/2019 y ordenar el archivo de estas actuaciones en los términos del art. 9 de la R.G. 4816/2020. Las costas se imponen en el orden causado.

**El Dr. Martín dijo:**

La Ley N° 27.541, creó el **régimen de solidaridad social y reactivación productiva** que, por su amplia trascendencia temática, se podría decir que se trató de una ley ómnibus. Los primeros tres títulos fueron reservados para I. Emergencia Pública; II. Sostenibilidad de la Deuda Pública y III. Sistema energético. A su vez a partir del título V, se abarcaron entre otros, los Derechos de exportación; emergencia sanitaria, reservas de libre disponibilidad y modificación de la Ley de Administración Financiera.

Ahora bien, en lo que es de interés en el presente, el Título IV versa sobre la materia tributaria, habiéndoselo denominado Obligaciones Tributarias y que consta de 10 Capítulos. Al primero de ellos –Capítulo I- que incluye los artículos 8 a 17 se lo **tituló Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs.**

En su redacción original el artículo 8° contemplaba -en su parte pertinente- el siguiente texto:

**Artículo 8°-** Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encuadren y **se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas**, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, **podrán acogerse**, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, **al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el presente Capítulo.** A tal fin, **deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME**, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del actual Ministerio de Desarrollo Productivo. Podrán acogerse al mismo régimen las entidades civiles sin fines de lucro.

**Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior** las deudas originadas en: .....

a) Cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo y los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales.

Los artículos siguientes versan: 1) artículo 9°: Incluye en forma explícita la deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial y fija las condiciones para el acogimiento.; 2) artículo 10°, se ocupa de las denuncias penales y de la prescripción vinculada a ellas, resultando relevante en este punto la condición de pago de las obligaciones sustanciales.

A su vez el artículo 11° se refiere a las exenciones y condonaciones, su alcance y medida. Entre las condiciones exige el cumplimiento del pago de acuerdo al artículo 10.

El artículo 13 complementa lo dispuesto en el artículo 11 definiendo las distintas formas de cancelación a través de pago contado, compensaciones y/o plan de pagos.

En ese marco el artículo 12 estando bajo el paraguas del Título IV – Capítulo I que como ya se dijo se lo tituló **Regularización ....para MiPyMEs**, trata sobre multas e intereses correspondientes a obligaciones ya abonadas con anterioridad a la sanción de la ley 27.541. No existe ningún indicio ni razonable interpretación que el artículo 12 haya cambiado el sentido del título del capítulo I al que pertenece, **ni del artículo 8°** que ratifica que el acogimiento se refiere también al régimen de condonación de multas, intereses y demás sanciones que se

establecen en el capítulo . Y si bien no hay acogimiento expreso en el caso de la condonación de pleno derecho, no ha estado en discusión que ese artículo 12 requiere que se cumpla la condición de MiPyME para su goce. Una interpretación en contrario alteraría el espíritu del legislador y discriminaría frente a aquellos que pagan lo adeudado en los términos que exige el régimen (acogimiento según los arts. 11 y 13), quienes deben demostrar su calidad de MiPyME.

Tampoco cabría la posibilidad de entender que las exclusiones que contempla el artículo 8° no son aplicables al artículo 12, porque a modo de ejemplo llegaríamos a la conclusión de que las deudas de obras sociales no se incluyen en el régimen de regularización pero se condonan los intereses y multas. Una lectura armónica y concordante al momento de desmenuzar la redacción del artículo 12° entiendo que debe hacerse el análisis dentro de un respetable marco de cada una de las exclusiones que prevé el Capítulo I de regularización, ya se trate de las incluidas en el artículo 8° (incisas en el alcance del régimen) o en el artículo 16° -anexas o colaterales, utilizadas en forma transversal en la mayoría de los regímenes que otorgan beneficios-.

Posteriormente se extendió el alcance de la Ley 27.541 mediante su similar N° 27.562, y entre los destacados, se eliminó la condición de MiPyMEs a cambio de exigencias referidas a la eventual tenencia de bienes en el exterior. Todo ello se materializó modificando la titulación del Capítulo I - Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera- y la redacción del artículo 8°, destacándose en lo pertinente su segundo y tercer párrafo referido a las exclusiones en esta nueva versión de regularización. Su contenido es el siguiente:

*Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las **deudas** originadas en cuotas con destino al régimen de **riesgos del trabajo**, los aportes y contribuciones con destino a las **obras sociales** y a los siguientes sujetos:*

***Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de:** i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, **posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.***

*Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismas. Quedan incluidos en estas disposiciones quienes revistan la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, incluidos fideicomisos.*

De lo expuesto se puede apreciar que el legislador en el mismo párrafo unificó las exclusiones, abarcando tanto las objetivas —deudas referidas a riesgos de trabajo y obras sociales— como las subjetivas o mixtas. Respecto del alcance de estas últimas se refiere a personas humanas o jurídicas que posean activos en el exterior, supuesto que no se aplica si se repatrian en forma parcial o total los activos financieros situados en el extranjero. La exclusión tampoco es aplicable a Mipymes, entidades sin fines de lucro y otras.

No cabe ninguna duda que la redacción le otorga el mismo rango de exclusión a las deudas objetivas, subjetivas o



mixtas, por ende las mismas tienen tanta o más trascendencia que las contenidas en el artículo 16, atento que las del artículo 8° hacen a la alcance del régimen mientras que las del artículo 16 se prevén subjetivamente por determinadas razones, entre otras penales, ajenas prima-facie- a la definición del régimen de regularización por tratarse de una razón adyacente y ajena al corazón de la definición.

En consecuencia, así como dijimos que para la Ley 27.541, no resultaba razonable ni factible escindir el artículo 12° del artículo 8° porque las condonaciones sobre deudas objetivas (p.ej. obras sociales) implicarían no incluir a las deudas por dichos conceptos pero sí condonar sus intereses o multas vinculadas; con la nueva Ley 27562, lo único que se hizo es agregar en el mismo artículo 8° una nueva condición para acceder al régimen, no resultando posible en esta nueva instancia sostener que una parte del mismo artículo 8° queda desprendida del artículo 12 y otra parte no, como así tampoco argumentar que eventualmente debió haber formado parte del artículo 16.

Por ende no abrigo dudas de la dependencia del artículo 12 al capítulo al que pertenece y al régimen en su conjunto, caso contrario el legislador estaría regulando una situación excepcional fuera de contexto (art. 12) entre dos artículos que regulan un mismo aspecto (Art. 11 y 13).

Al mismo tiempo considero que no resulta aplicable el antecedente TELCOM VENTURES DE ARGENTINA S.A. que tramitara ante esta Vocalía, pues durante la etapa de instrucción el Fisco Nacional no puso en conocimiento de este Tribunal la existencia de bienes en el exterior, razón por la cual no se expidió al respecto ya que no pudo realizarse la interpretación del artículo 12 bajo el presente supuesto.

Por todo lo expuesto entiendo que no corresponde la condonación de multas que se solicita en el presente expediente, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones en la Vocalía Instructora.

**La Dra. Gómez dijo:**

Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.

Atento al resultado de la votación que antecede,

**SE RESUELVE:**

Declarar condonadas las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 78/2019 y 79/2019 y ordenar el archivo de estas actuaciones en los términos del art. 9 de la R.G. 4816/2020. Las costas se imponen en el orden causado.

Regístrese, notifíquese, y archívese.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.03.07 14:27:47 -03:00

Daniel Alejandro Martín  
Vocal  
Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva  
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.03.07 15:13:27 -03:00

Edith Viviana Gomez  
Vocal  
Vocalía X Sala D Competencia Impositiva  
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.03.07 15:19:07 -03:00

Agustina O'Donnell  
Vocal  
Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva  
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.03.07 15:19:06 -03:00